

AMAZON WATCH

Autores: Dra. Janet Lloyd y Atossa Soltani

Reporte Sobre: Plan Colombia y Los Pueblos Indígenas

Después de cuarenta años de guerra civil, Colombia está entrando aún más profundamente en conflicto. Las tácticas brutales de la fuerza de seguridad, de los narcotraficantes, guerrillas izquierdistas y grupos paramilitares, resultan en las muertes violentas de unos 20 colombianos diarios. Por lo menos unos 2 millones de colombianos han sido desplazados desde 1985 y casi 300,000 por año en años recientes. Una característica sorprendente del conflicto en Colombia es que la mayoría de las víctimas de guerra son civiles sin armas – miembros de pueblos rurales, campesinos pequeños y líderes de la sociedad civil.



Los pueblos indígenas quienes viven en áreas remotas abandonadas por el estado, están entre los más vulnerables en Colombia. Su lucha pacífica por sus derechos territoriales y culturales y su visión alternativa para el desarrollo de sus comunidades los lleva sin advertencia contra los poderosos intereses económicos que alimentan la guerra.

La iniciativa del gobierno colombiano, Plan Colombia, financiado en parte por los Estados Unidos, está empujando a los pueblos indígenas al borde. La ayuda militar de los Estados Unidos ha intensificado la militarización y ha provocado una ola de masacres rurales. La fumigación apoyada por los Estados Unidos está destruyendo la agricultura de escala pequeña y la alta biodiversidad en los ecosistemas de bosques lluviosos. Con las palabras de Roberto Pérez, Presidente de la Autoridad Tradicional U'wa:

“Plan Colombia es una sentencia de muerte para nosotros... es un plan de violencia. El dinero que los Estados Unidos esta utilizando en Plan Colombia ira a proteger a las compañías internacionales para comprar armas, equipos más sofisticados, y para construir bases militares en las zonas más ricas en recursos. Y

al decir que erradicarán la cosecha de la coca con la fumigación aérea, ellos también están contaminando el medio ambiente, los ríos, y los cultivos agrícolas usados para la alimentación local” (Feb. 7, 2001).

Los Pueblos Indígenas de Colombia

Considerando la cantidad pequeña en relación con la población nacional, la poderosa población indígena de aproximadamente 800,000 miembros es sorprendentemente diversa. 84 pueblos indígenas quienes hablan 64 lenguajes diferentes viven por todas las distintas regiones geográficas de Colombia cubriendo unas 20,234,282.12 hectáreas de tierras tituladas.¹ En Colombia, como en el resto de Latinoamérica, los pueblos indígenas viven con un legado colonial: la pérdida de sus tierras, marginalización socioeconómica, discriminación racial y étnica, y abusos de sus derechos humanos.

¹ ‘El Movimiento Indígena en Colombia’, Jesús Avirama y Rayda Márquez. En Pueblos Indígenas y la Democracia en Latinoamérica, Donna Lee Van Cott (ed.), Macmillan Press, 1994.

Para erradicar este legado, las primeras organizaciones indígenas de Colombia fueron formadas en los 1970s. Organizaciones como la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) han luchado por sus derechos culturales, la recuperación de sus tierras, el desarrollo de sus comunidades y la participación institucional. En los 1990s, líderes indígenas habían ganado suficiente influencia política para tomar parte de un papel importante en la redacción de la nueva Constitución de Colombia en 1991, la cual incorporó el reconocimiento sustantivo de los derechos indígenas culturales, territoriales y políticos.² En 1996, 80% de la población indígena vivían en resguardos que cubrían 25% del territorio nacional. 73% de estas tierras se encuentran en la región Amazónica.

Precisamente cuando la lucha indígena estaba finalmente floreciendo, una combinación entre las fuerzas económicas globales, el conflicto civil creciente y el aumento de grupos armados virulentos llevaron a Colombia a la crisis. Con las autoridades estatales y la democracia nacional socavadas por instituciones gubernamentales débiles y la corrupción dominante, los sectores armados de la sociedad colombiana intensificaron su lucha por el control de los recursos naturales ricos del país.

Expresando firmemente su propia neutralidad, las organizaciones indígenas insisten en el derecho de los pueblos indígenas de mantenerse autónomos de la turbulencia política de Colombia. Pero la agravante guerra civil a puesto a las comunidades indígenas en medio del conflicto armado entre las facciones en guerra. Ignorando la estancia neutral de los pueblos indígenas, grupos armados acusan frecuentemente a líderes indígenas y comunidades parciales a la política, convirtiéndoles en objetivos 'legítimos' de violencia. Como declaró el líder indígena del pueblo Cauca, Gerardo Delgado:

“Ellos (los pueblos indígenas) se encuentran golpeados por las botas militares de derecha e izquierda.”

Muchos líderes indígenas han sido asesinados hasta ahora y las organizaciones apenas pueden funcionar en varias partes de Colombia. En Junio 2001 la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos estimó que la mitad de los pueblos indígenas enfrentan la aniquilación debido a la usurpación de violencia. Factores, como la invasión de tierras, operaciones petroleras, y proyectos de desarrollo masivos también aumentan la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. El caso de los Karijonas del sureste es un ejemplo, ellos se han reducido a 70, de 280 en 1993.³

Plan Colombia

Ayuda Militar de los Estados Unidos

En el año 2000, el Presidente Clinton aprobó un paquete de ayuda de \$1.3 mil millones para Colombia, principalmente para entrenar y equipar a la armada colombiana. Aunque al principio el Presidente Pastrana declaró el Plan Colombia como un esfuerzo para fortalecer el proceso de paz y estimular el desarrollo económico, con la ayuda de los Estados Unidos, el Plan se convirtió en una iniciativa militar predominante para erradicar el narcotráfico y terminar con los grupos guerrilleros.

Los críticos argumentan que la promoción estadounidense de responder a la guerra civil con fuerza militar ha contribuido activamente al aumento en la violencia actual y ha sido un golpe para las organizaciones de la sociedad civil quienes luchan para encontrar soluciones pacíficas para resolver el conflicto. Los EEUU se rehúsa a considerar las condiciones de derechos humanos para la ayuda militar, lo cual efectivamente sanciona los abusos de derechos humanos por las acciones militares y paramilitares. La fuerza armada

² Ibid.

³ 'Tribu Colombiana Amenazada por la Invasión de la Guerra Civil,' Juan Forero, 14 de mayo, 2001

colombiana tiene el peor record de abusos de derechos humanos en el hemisferio. Colaboraciones militares tácitas y activas con grupos paramilitares se encuentran bien documentadas.⁴ Amnesty International reporta que la inacción militar es el factor principal detrás del fracaso en imponer la mayoría de las ordenes de arrestos judiciales por el Fiscal General contra grupos paramilitares.⁵

Desde que la ayuda estadounidense llegó a la región, se han multiplicado las masacres en gran parte a causa del poder floreciente de los grupos paramilitares los cuales son parte de un organismo madre, la **Autodefensa Unida de Colombia** (AUC). El número de masacres en los primeros cuatro meses de 2001 es aproximadamente el doble de la figura en el mismo periodo del 2000. La **Red de Solidaridad Social** del gobierno colombiano reportó en abril que los paramilitares habían asesinado a 529 de las 769 personas que murieron durante las masacres en los primeros cuatro meses de 2001.⁶ La armada colombiana rara vez ha actuado para proteger a la población civil, ni en casos numerosos donde se han hecho súplicas de ayuda antes que ocurran los ataques.⁷

El temor también ha aumentado debido a las consecuencias ambientales y sociales causadas por la erradicación aérea, apoyada por los EEUU, sobre las cosechas de coca y amapola ilegales usando herbicidas dañinos. El rocío aéreo es dañino para el medio ambiente, destruye cosechas, y somete a que muchos campesinos colombianos dejen sus tierras y sustento. El paquete de ayuda de los EEUU estipuló en un principio que la fumigación sería acompañada con programas de desarrollo alternativo. Pero la falta de coordinación gubernamental ha resultado en la erradicación de recursos alimenticios e ingresos locales a causa de la fumigación, mientras que los programas de desarrollo de USAID aún tienen que ser realizados.

La Iniciativa Regional Andina

A fines de Marzo, el Presidente Bush anunció su propia estrategia contra las drogas para 2002, La Iniciativa Regional Andina. Lanzado por Bush como un 'acuerdo balanceado' de gastos socioeconómicos militares, esta iniciativa corta estimadamente un 24% de la ayuda militar y policial para Colombia en 2002 a comparación con los niveles de 2000-2001, pero aumenta la ayuda militar a otras naciones andinas. Se espera una militarización completa de la región Andina por medio de un aumento alto en ayuda militar a los vecinos de Colombia. La nueva iniciativa de Bush de US \$880 millones se añade al acuerdo aprobado de dos años en el 2000 de US \$1.3 mil millones.⁸

Sin embargo, las reformas del Senado para el proyecto de ley de las operaciones de apropiaciones extranjeras han alterado el empuje de la Iniciativa Regional Andina. El Comité de Conferencia está apunto de aprobar las reformas para introducir condiciones de derechos humanos como requisitos necesarios en el paquete de ayuda militar y, después de seis meses de un 'periodo de gracia', parar la fumigación hasta que se realicen los planes para el desarrollo alternativo.⁹

⁴ Colombia Human Rights Certification II January 2001, Amnesty International, Human Rights Watch and Washington Office on Latin America (WOLA)

⁵ Amnesty International Colombia Country Report 2001

⁶ 'Colombia killings rise, government blames militias,' Reuters, April 18, 2001

⁷ 'July 2001 Update on Main Actors in Colombian Conflict,' Washington Office on Latin America

⁸ 'US military and police aid: The 2002 aid request,' Center for International Policy, May 2001

⁹ 'Senate Votes on Colombia Package; Bill Goes to Conference Committee; Act Now!,' November 2001; ' Foreign Operations Bill Stuck in Conference Committee,' Dec 2001, Latin America Working Group

Fumigación

¿Porqué los Campesinos Cosechan Coca?

Un indígena anciano en las mesetas peruanas cuenta el mito que aún se pasa de padre a hijo: “Cuando los blancos vinieron, nuestros ancestros consultaron con el Dios Sol. Él les dijo que confiaran en la hoja de coca. La coca les alimentará y curará, dijo él. Pero la coca convertirá a los hombres blancos en brutos e idiotas...”

Para los indígenas, la coca es una planta sagrada usada en propósitos rituales y medicinales por miles de años. La producción en masa de la coca y el abuso asociado de las drogas contradicen las prácticas tradicionales indígenas sociales y cosmológicas. Sin embargo, varios factores llevan a que las comunidades indígenas cultiven un 17% de las cosechas ilegales de Colombia.¹⁰



Los críticos argumentan que las políticas financiadas por los EEUU para erradicar el cultivo de cosechas ilegales por medio de la fumigación aérea ignoran las razones por las cuales pequeños agricultores son llevados a cosechar para la producción de drogas. Las actividades económicas legales que generan ingresos son escasas en las áreas fronterizas violentas con una infraestructura básica limitada, pocos servicios y falta de lazos con la economía nacional.¹¹ Para aumentar el ingreso de la cosecha subsistente, muchos agricultores rurales, incluyendo comunidades indígenas, cultivan cosechas ilegales para conseguir dinero para comprar libros escolares, medicina y ropa. Mientras las ganancias que los campesinos obtienen de una parcela pequeña de coca son solo unos US \$140 al mes, no hay otra actividad económica que les beneficie como la coca.¹²

La violencia se encuentra en el centro de la producción de coca. Facciones armadas impunes que matan a civiles desarmados exhortan a que las comunidades planten coca y después ellos les compran la pasta de coca directamente a precios artificiales bajos.¹³ El desarrollo alternativo solo puede funcionar dentro de un marco de un proceso pacífico próspero.

La Coca Devasta al Pueblo Cofán

El pueblo Cofán del sureste de Colombia fue forzado a producir coca para poder sobrevivir físicamente y económicamente. En los 1980s, la expansión de la industria de la coca en sus tierras causó daños innumerables. Los colonizadores que destruyeron sus bosques y tomaron posesión de las tierras de Cofán para cultivar coca, inundaron la región. El conflicto sobre la propiedad de las tierras resultó en las muertes de miembros del pueblo Cofán. Los miembros de Cofán que no cedieron al cultivo de coca fueron forzados a dejar la región. Intimidados por grupos armados, con el volumen de sus tierras productivas y sus suministros de pesca y caza reducidos, los que se quedaron no tuvieron otra opción que plantar coca.

¹⁰ 'Third report on The Human Rights Situation in Colombia,' Inter-American Commission on Human Rights, 1999.

¹¹ 'Alternative Development Won't End Colombia's War,' Jason Thor Hagen, Institute for Agriculture and Trade Policy, 2001

¹² 'Plan Colombia's "Ground Zero". A Report from CIP's trip to Putumayo, Colombia,' Adam Isacson and Ingrid Vaicius, Center for International Policy, March 9-12, 2001.

¹³ Ibid.

Para los Cofán, el cultivo de cosechas ilegales causó la pérdida de su forma de vida tradicional debido a la interrupción social y económica, la deforestación, la pérdida de sus tierras ancestrales, violencia y criminalidad.¹⁴ El asesinato de Pablo Emilio Díaz Queta, Vicepresidente de las Autoridades Tradicionales de Cofán del Valle del Guamuéz y San Miguel, por actores armados supuestamente paramilitares, en el día 3 de Enero, 2001, hizo que más miembros del pueblo Cofán huyeran por la frontera hacia Ecuador.¹⁵

Impactos de la fumigación

Devastado primeramente por la producción de coca, el pueblo Cofán y otras comunidades indígenas y rurales del sureste de Colombia están sufriendo los impactos de los intentos del gobierno de erradicar los cultivos de coca. Las comunidades indígenas de la región han sido afectadas desproporcionadamente por las prácticas de fumigación de cultivos que implica el rocío aéreo del herbicida Roundup Ultra.

La compañía gigante química y biotecnológica, Monsanto, con sede en St. Louis, la cual manufacturó Agent Orange, una sustancia de defoliación controversial usada durante la Guerra de Vietnam, también es el productor de Roundup Ultra. El ingrediente activo de Roundup, **glifosato**, fue clasificado como el número tres entre 25 de las sustancias químicas más dañinas para humanos en un estudio de la Agencia de Protección Ambiental (EPA – Environmental Protection Agency) en 1993.

De acuerdo a un reporte de CorpWatch, se estima que unos 70,000 galones de Roundup Ultra fueron rociados en Colombia en los primeros seis meses de 2001. En el año 2000, casi 145,750 galones fueron rociados sobre unas 53,014 hectáreas.¹⁶

Compañías privadas de aviones de los EEUU y la fuerza aérea de Colombia rocían esta sustancia química letal sobre los pueblos pobres y granjas de la región contaminando suministros de agua potable, destruyendo cultivos alimenticios, y envenenando y matando ganados. Los observadores reportan que el rocío aéreo se conduce de una altura demasiado alta como para fumigar los cultivos para la producción de drogas con precisión; por lo tanto se contaminan muchos cultivos de subsistencia y cuerpos de agua. En noviembre 2000, 10 días seguidos de rocío aéreo sobre las reservas indígenas Inga en Nariño dejaron enfermos a 80% de los niños. Un doctor local comentó sobre la epidemia de fiebre, diarrea, y quejas severas de problemas con los ojos y la piel.¹⁷

Una agrónoma colombiana, Elsa Nivia, ha declarado que solo en los primeros dos meses en 2001, las autoridades locales reportaron que 4,289 seres humanos sufrían de problemas de la piel o gástricas, mientras 178,377 animales, incluyendo ganado, caballos, cerdos, patos, gallinas y peces murieron a causa del rocío.¹⁸

Hasta las etiquetas de Monsanto advierten sobre la toxicidad: “Roundup mata a casi todas las plantas verdes en crecimiento. Roundup no debe ser usado en grandes cuerpos de agua como estanques, lagos o arroyos ya que Roundup puede ser dañino para ciertos organismos acuáticos.” Las etiquetas recomiendan que los animales deberían mantenerse fuera de las áreas rociadas por dos semanas y que en el caso de que las frutas o nueces sean rociadas, estas no se deberían consumir por veintidós días. Sin embargo, el Departamento del Estado de los EEUU niega que Roundup Ultra es dañino.

¹⁴ ‘Denuncia del Asesinato del Líder Cofán de Putumayo y de la Fumigación de Cosechas Tradicionales en Territorios Indígenas y de los Actos de Violencia que Empeoran la Situación Grave de los Derechos Humanos en Putumayo, Colombia,’ El Pueblo Cofán y los Consejos Indígenas del Valle Guamuéz y San Miguel y La Asociación Latinoamericana sobre los Derechos Humanos (ALDHU), 20 de enero, 2001.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ ‘Toxic Drift: Monsanto and the Drug War in Colombia,’ Jeremy Bigwood, CorpWatch, 21 de junio, 2001.

¹⁷ ‘Plan Bomba, Enloquecidos Por La Picazón,’ Alfredo Molano Bravo, Sodepaz.

¹⁸ ‘Toxic Drift: Monsanto and the Drug War in Colombia,’ Jeremy Bigwood, CorpWatch, 21 de junio, 2001.

La evidencia reciente sugiere que los impactos en la salud causados por el rocío aéreo en Colombia pueden estar relacionados con el uso del aditivo Cosmo Flux 411F, un **surfactante** de Roundup Ultra. En mayo 2001, la Dra. Nivia dijo que “la mezcla de Roundup Ultra con el **surfactante** Cosmo Flux 411F puede aumentar la acción biológica del herbicida por cuatro veces, produciendo niveles relativos de exposición los cuales son 140 veces más altos que las dosis recomendadas para las aplicaciones agrícolas normales en los Estados Unidos; dosis que de acuerdo con el estudio mencionado, pueden intoxicar y hasta matar a rumiantes.” Las autoridades admiten que la mezcla no ha sido probada completamente.

El impacto desproporcionado de la fumigación sobre los pueblos indígenas llevó a que la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia (OPIAC), con el apoyo de la oficina Ombudsman de Derechos Humanos del gobierno colombiano tomaran una acción legal demandando la prohibición del rocío aéreo en territorios indígenas. Una decisión inicial de la corte suspendió la fumigación a fines de julio, pero fue revocada brevemente después.¹⁹ Las prácticas de erradicación de cultivo amenazan la vida acuática de las vías de agua en el Amazonas al dejar que sustancias químicas fluyan desde los campos de cosechas. También se estima que por cada hectárea que se fumiga, 1.23 hectáreas de bosque lluvioso son cortadas cuando se empujan a los cosechadores de la coca dentro de áreas aún más remotas violando los territorios indígenas amazónicos.



La Fumigación Está Fracasando

Viendo las discrepancias prominentes en el paquete de ayuda de los EEUU a Colombia, el Senador Leahy (D-VT) delineó recientemente en el Senado el caso en contra de la erradicación de cultivo como una solución contra el narcotráfico. Hasta ahora la erradicación aérea no ha llevado a la reducción del abuso de drogas o adicción en los EEUU, ni a la caída sustancial en el abastecimiento de drogas de Colombia a los Estados Unidos.

El Estatus Quo Rural

Una Historia de Conflicto

El conflicto de intereses entre las comunidades indígenas y el grupo elitista rural de Colombia viene desde siglos atrás. En Colombia la posesión de tierras se concentra en las manos de agricultores grandes, y el sector privado controla casi toda la inversión agrícola. Consecuentemente, los agricultores pequeños luchan por sobrevivir bajo la asombra de los grandes propietarios de tierras.²⁰ El considerable poder económico de los grupos elitistas de producción iguala a su influencia política potente que tienen en todos los niveles del gobierno.²¹

Afirmando la reclama histórica por sus derechos territoriales ancestrales, las comunidades indígenas desafían al status quo rural sin advertencia. Desde los tiempos coloniales, los elitistas rurales tradicionalmente han percibido los reclamos territoriales indígenas como un ataque contra las fundaciones económicas y políticas de su propio poder.

¹⁹ 'Colombia drug spraying to continue, despite court-ordered suspension,' Associated Press, 28 de julio 2001.

²⁰ The Rights of Indigenous People in Colombia, Second Report On The Situation Of Human Rights In Colombia, InterAmerican Commission of Human Rights, 1998.

²¹ 'Alternative Development Won't End Colombia's War,' Jason Thor Hagen, Institute for Agriculture and Trade Policy, 2001.

Las hostilidades en Colombia rural se empeoraron después de que las reformas económicas neoliberales de los 1990s crearon una depresión en la agricultura colombiana. La eliminación de protecciones sobre productos agrícolas obligaron a que agricultores colombianos compitan en un ambiente global. Obligados a redirigir la producción agrícola, los propietarios elitistas lucharon para obtener más tierras para la producción lucrativa de ganado. La competencia intensiva por las tierras creó resentimientos sobre las tierras indígenas comunales de base.

Ataques Paramilitares

Entre los propietarios más grandes de Colombia se encuentran los líderes del narcotráfico quienes lavan sus lucros por medio de la compra de áreas extensas de territorios en las regiones de la costa. Los líderes del narcotráfico, al igual que los propietarios tradicionales elitistas, tienen una historia de contratar a armadas privadas para proteger sus intereses económicos y políticos. Hoy en día, estos grupos paramilitares usan asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres, y desplazamientos forzados de poblaciones completas para controlar a agricultores locales, campesinos rurales y comunidades indígenas quienes bloquean sus intereses.²²



Proprietarios grandes que tienen interés en las tierras indígenas casi siempre financian campañas paramilitares de terror para forzarlos a desalojar sus comunidades. El departamento de El Cauca tiene una de las más grandes concentraciones de pueblos indígenas en la nación, compuesto por las comunidades Páez, Yanagona, Coconuco y Guambiano. Los intereses establecidos del sector agroindustrial en El Cauca se reflejan particularmente en los grandes niveles de abuso y desalojos de los pueblos indígenas.²³ Una delegación reciente de Amnistía Internacional en El Cauca reportó que las comunidades indígenas y afro-colombianas del Río Naya viven bajo amenazas constantes de ataques violentos por grupos paramilitares. En abril 2001, grupos paramilitares mataron a 35 personas en el Valle Naya y ordenaron a las comunidades restantes que abandonen sus tierras.²⁴ Frecuentemente, las empresas agrícolas toman posesión de tierras desiertas.

En la Sierra Nevada de Santa María, los paramilitares usan estrategias diferentes en contra de las poblaciones indígenas Wiwa y Koggi. En vez de forzar que las comunidades desalojen sus tierras, los paramilitares usan intimidaciones violentas para derrotar los esfuerzos organizados de las comunidades, incluyendo asambleas de madres y programas de alimentación para niños. La expansión paramilitar dentro de la región en la primavera de 2001 fue financiada por propietarios de tierras después de una ola de secuestros de rancheros ricos por las guerrillas.²⁵ En el clima actual, los elitistas rurales perciben cualquier intento de los pueblos indígenas en consolidación organizacional como una amenaza. El líder indígena Alberto Achito afirmó:

²² 'Information about the Combatants,' Center for International Policy, November 2001.

²³ The Rights of Indigenous People in Colombia, Second Report On The Situation Of Human Rights In Colombia, InterAmerican Commission of Human Rights, 1998.

²⁴ 'Colombia: Las comunidades del Cauca quedan en el desamparo,' Amnistía Internacional Comunicado de Prensa, 8 de agosto, 2001.

²⁵ 'Denuncia de la guerra,' Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, Resguardo Koggi-Malayo-Arhuaco, 25 de mayo 2001.

“Las comunidades indígenas se consideran como un objetivo militar por todos los grupos armados no por que estén con ningún lado, ni por tener conexiones, sino por defender nuestra posición.”

La pasividad del gobierno frente a la violencia paramilitar contradice el reconocimiento oficial de los derechos indígenas. Como comentó recientemente un líder indígena Caldas, “ nosotros estamos cansados de reunirnos con oficiales del gobierno y escuchar sus promesas y después regresar a nuestras comunidades para ver el mismo río de sangre.”

Abusos Guerrilleros

El Frente Armado Revolucionario de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han cometido repetidamente violaciones de derechos humanos en las comunidades indígenas. En Cauca, se presiente que FARC es responsable por las muertes de cuatro miembros indígenas en diciembre 2000. El Gobernador de Cauca Floro Alberto Tunubalá, el primer gobernador indígena de Colombia, y su gabinete han recibido amenazas de los paramilitares y FARC.²⁶

El reclutamiento forzoso por FARC de niños indígenas ha traumatizado a las familias indígenas. Los Arahuaco de Sierra Nevada no han tenido el poder de resistir a los grupos de FARC que han invadido sus pueblos para comprar provisiones y reclutar a adolescentes. Los Arahuaco saben que aunque el reclutamiento es forzado en sus pueblos, los paramilitares los acusarían de estar colaborando con los rebeldes como es el caso de sus vecinos, el pueblo Kankuamus, quienes fueron asesinados por docenas y reubicados en barriadas por los paramilitares.²⁷

Economía Estratégica

Plan de Vida

La constitución de Colombia de 1991 dió a los resguardos indígenas legalmente reconocidos el derecho de tener un desarrollo económico y social autónomo. Muchos pueblos indígenas tomaron está oportunidad para establecer sus propios programas de desarrollo en sus comunidades, conocidos como ‘Planes de Vida’ fundados en los intereses comunales indígenas y sus valores culturales. Por ejemplo, en 1994, el pueblo Guambiano de Cauca desarrollaron un ‘Plan de Vida’ basado exclusivamente en una visión de la comunidad de un desarrollo que erradicaría la desigualdad económica y las estructuras sociales discriminatorias.²⁸

Los valores de las comunidades indígenas directamente contradicen los modelos económicos capitalistas fundados en nociones de propiedad privada y enriquecimiento individual. No siendo sorprendente, los elitistas corporativos de Colombia casi nunca tienen una opinión favorable ante los esfuerzos indígenas de controlar el desarrollo económico en sus tierras. Aproximadamente, 95% de los recursos naturales de la región se encuentran en territorios indígenas legalmente titulados y áreas que los pueblos indígenas llaman tierras ancestrales. Asentados sobre recursos naturales ricos y resistentes a los proyectos de desarrollo de gran escala, las comunidades indígenas se ven como un obstáculo para el ‘progreso’. Cuando es conveniente, las compañías y propietarios grandes acusan a las comunidades indígenas de estar del lado de las guerrillas o de ser manipulados por las guerrillas.

Proyectos de Desarrollo

El caso del pueblo Embera Katío de Córdoba ilustra las consecuencias de las comunidades indígenas cuando resisten proyectos de desarrollo de gran escala en sus tierras. Los Embera Katío se

²⁶ ‘NGO Declaration Against Violence in Cauca and in Solidarity with March against the Violence,’ May 17, 2001.

²⁷ ‘Tribu Colombiana Amenazada por la Invasión de la Guerra Civil,’ Juan Forero, 14 de mayo, 2001

²⁸ ‘Plan de Vida – an Indigenous Initiative for Cultural Survival,’ Bastian Hermisson, Cultural Survival Quarterly 23 (4).

encuentran en una lucha legal larga por la compensación de los impactos ambientales y sociales causados por la represa hidroeléctrica cerca de sus tierras. El juramento final ordenó un plan de mitigación y compensación para los Embera.

Como respuesta directa a la resistencia de los Embera contra la represa, las fuerzas paramilitares entraron a la reserva Embera Katío y trajeron una ola de masacres, desapariciones, y la intimidación de líderes de la comunidad.²⁹ Las fuerzas paramilitares atentaron forzar a los Embera a cultivar coca, lo cual los Embera siempre han prohibido. Las comunidades agrícolas justo a las afueras de los límites de la reserva fueron asesinadas y forzadas a irse. Los Embera han escogido no irse. Los líderes de la comunidad también rehúsan dejar que las guerrillas se establezcan o tengan actividades en sus tierras, lo cual crea fricciones con grupos guerrilleros. La persecución de los líderes Embera llegó a lo máximo en el verano 2001. Después del secuestro del líder Embera Kimi Pernia Domico, quien tenía una popularidad alta, Pedro Alirio Domico, el gobernador de la reserva, fue asesinado por los paramilitares por protestar contra la desaparición de Pernia.³⁰

Compañías de los EEUU

Los pueblos indígenas también se han levantado contra los intereses de compañías de los EEUU en Colombia. Las comunidades indígenas localizadas en áreas donde los EEUU tienen intereses económicos han sido testigos de la militarización de sus tierras ancestrales. El caso del pueblo U'wa en el nordeste de Colombia y la enorme compañía petrolera Occidental Petroleum de los EEUU demuestra la relación entre el petróleo, la violencia y Plan Colombia.

Para proteger sus operaciones, Occidental Petroleum cuenta fuertemente con las fuerzas de seguridad de Colombia. Durante el año pasado, 3,000 soldados colombianos ocuparon territorios U'wa para proteger la maquinaria de extracción de petróleo y los yacimientos petroleros. En varias ocasiones, las intervenciones violentas de la policía contra bloqueos pacíficos de las vías por los U'wa y sus aliados dejaron a muchos heridos y mataron a tres niños indígenas. Tres humanitarios americanos que trabajaban con los U'wa fueron secuestrados y ejecutados por las guerrillas.

Durante el verano 2001, grupos paramilitares empezaron a invadir la región. Un número de masacres brutales en el pueblo vecino de Arauca ha aterrorizado a la población local.³¹ Aunque Occidental Petroleum a fracasado en su meta de encontrar petróleo, el territorio U'wa – en el cual se cree que hay casi mil millones de barriles de petróleo – se ha convertido en un campo de batalla peligroso.

Las masacres de Santo Domingo en 1998 atestiguan el involucramiento directo de compañías de seguridad privadas contratadas por compañías de los EEUU en las masacres civiles. AirScan, una compañía de seguridad privada que se especializa en la inspección aérea, fue contratada por Oxy en 1997. De acuerdo a un testimonio de oficiales militares de Colombia, AirScan suministró información estratégica clave a la fuerza militar que fue recogida durante su trabajo de seguridad para Oxy y contribuyó con el ataque aéreo de Santo Domingo usando equipos infrarrojos y de video para encontrar los objetivos en el área. Mientras supuestamente estuvieron buscando a rebeldes, el ataque mató a 18 civiles, nueve de los cuales fueron niños. Ningún rebelde fue matado. Este caso se encuentra actualmente en investigación por las cortes colombianas.³²

²⁹ 'Colombian Paramilitaries Suspected of Murders of Four Indigenous Leaders and 21 Abductions,' International Rivers Network, 8 de octubre 2000.

³⁰ 'Urgent Action Appeal,' Amnesty International, 7 de junio 2001.

³¹ 'Paramilitary Forces Act With Impunity in Spite Of Armed Forces Knowledge That They Are Mobilizing Over 1000 Men In Arauca,' Nizkor International Human Rights Team, Serpaj Europe, 3 de octubre 2001.

³² 'U.S. Pilots Summoned in Colombian Bombing Probe,' Phil Stewart, Reuters, 14 de junio 2001.

El Petróleo y Plan Colombia

Las compañías de los EEUU, particularmente en la industria petrolera, han presionado fuertemente para que los EEUU de ayuda militar a Colombia. Apoyando a Plan Colombia, un representante de Occidental Petroleum testificó que la fuerza armada colombiana se encontraba “grandiosamente mal armada.” Los lazos de la compañía con la armada colombiana y otras facciones armadas fueron revelados ante el Congreso de los EEUU cuando el Vicepresidente de Asuntos Públicos de Oxy testificó que los empleados de Oxy son “agitados regularmente” por grupos guerrilleros de FARC y de ELN, los cuales les requieren que paguen un ‘impuesto de guerra’ para poder trabajar.



Grupos de derechos humanos y ambientales han delineado la conexión entre el desarrollo petrolero y la militarización por varios años. Las compañías que trabajan en Colombia deben de pagar US \$1 por cada barril de petróleo que producen, el cual va directamente a la fuerza armada por sus servicios de protección. Uno de cada cuatro soldados colombianos se dedica a proteger las instalaciones de petróleo.

Los críticos del Plan Colombia argumentan que el verdadero objetivo de la ayuda de los EEUU es para eliminar las amenazas contra los intereses económicos de los EEUU en la región. La compañía Rand, una fuente conservativa de ideas con gran influencia en la política internacional de los EEUU, enfatizó en un reporte reciente comisionado por la Fuerza Aérea de los EEUU, que Plan Colombia debe solidificar el mando de los EEUU en Colombia antes de que la guerra civil prevenga el acceso a las reservas inmensas de petróleo en la región.³³

Actualmente, ONIC se encuentra trabajando en un reporte con la Comisión para Refugiados de las Naciones Unidas para documentar el desplazamiento indígena. Parece que en varios casos el desplazamiento no ocurre a causa del conflicto civil sino por la necesidad de tener acceso a las riquezas minerales como el carbón, petróleo y oro.

La Guerra de Colombia no es Nuestra Guerra

Las desapariciones y los asesinatos de representantes indígenas son testimonios de la vulnerabilidad de los pueblos que luchan por defender su integridad territorial y cultural. El asesinato reciente de 5 líderes indígenas, entre ellos el fundador de ONIC, durante la apertura del Congreso Nacional Indígena de Colombia en noviembre 2001 fue otro aviso que en Colombia la brutalidad de conquista continúa a través del tiempo. Sin embargo, a pesar de las amenazas armadas, los pueblos indígenas en todo Colombia continúan afirmando sus derechos históricos y expresan su protesta contra las masacres de miembros de sus comunidades. La resistencia ha tomado varias formas.

Desde junio 2000, el pueblo Páez de la cordillera andina del suroeste de Colombia han desplegado 800 guardias voluntarios civiles Páez, armados solamente con bastones de mando tradicionales, para demandar que las guerrillas y narcotraficantes se vayan de sus tierras. Los guardias Páez han

³³ 'Colombian Labyrinth: the Synergy of Drugs and Insurgency and its Implications for Regional Stability,' Angel Rabasa and Peter Chalk, RAND, 2001.

rescatado pacíficamente a niños Páez que fueron reclutados por las guerrillas, destruido laboratorios de cocaína, bloqueado sus vías y han impuesto toques de queda nocturnos.³⁴

En mayo 2001, el pueblo indígena Cauca se unió con las comunidades afro-colombianas y campesinos pequeños para formar una marcha fuerte por toda la región de Cauca para protestar contra la presencia de las facciones armadas y la violencia contra las minorías étnicas.³⁵

En junio 2001, más de 1000 miembros indígenas llegaron a Tierralta para tomar parte en una Misión Humanitaria Indígena organizada por ONIC para buscar a Kimi Pernia Domico, un portavoz reconocido mundialmente del pueblo Embera Katío, quien fue secuestrado por hombres armados el 2 de junio. Tierralta es la cede y base operacional de AUC.³⁶

Aunque la búsqueda de Kimi Pernia fue en gran parte un acto simbólico, los pueblos indígenas colombianos triunfaron al difundir su mensaje que la guerra de Colombia no es su guerra. Como declaró Jesús María Aranda del Consejo Regional Indígena de Cauca, “ Es simple. Solo pedimos lo que es nuestro.”

³⁴ 'Sticks roust rebels and drugs. Colombia's Paez Indians don't use guns but won back their community,' Juan O. Tamayo, Knight Ridder News Service.

³⁵ 'NGO Declaration Against Violence in Cauca and in Solidarity with March Against the Violence,' 17 de mayo 2001.

³⁶ 'Colombian Indians Resist an Encroaching War: Indigenous People Join To Search for Leader,' Scott Wilson, Washington Post, 18 de junio 2001.